**La renta es primero, incluso durante la pandemia**

Amenazar con echar a las familias de sus casas durante la lucha contra el coronavirus no es sólo moralmente sospechoso, es peligroso.

**Por  Matthew Desmond**

Autor de “Evicted: Poverty and Profit in the American City.”

Hace un año y medio, Jhon Loaiza y su esposa, Sugey Bedoya, se mudaron con sus tres hijas — que ahora tienen 12, 5 y 3 años — desde un departamento de dos dormitorios en la ciudad de Nueva York a una casa compacta de ladrillos de una sola planta en San Antonio. Les encantaba esa casa — tenia un jardín cercado en la parte de atrás y cuatro dormitorios, todos con una suave alfombra color marrón claro —y también la nueva ciudad. Los domingos podían salir a caminar junto al río mientras comían helados o pasear en bicicleta después de ir a la iglesia. Por la noche, el Sr. Loaiza ponía música salsa o regatón , mientras hacía dar vueltas a sus niñas en la sala y todos reían. Su amplia sonrisa ponía de realce sus hoyuelos en la cara.

Eso fue antes — antes de que el Sr. Loaiza perdiera sus ingresos debido al cierre de negocios, antes de que él y su familia dejaran la casa porque fueron amenazados con ser desalojados, y antes de que él contrajera Covid-19, probablemente como resultado de esa mudanza.

Con cuarenta y cinco años de edad y un cuerpo delgado y atlético, el Sr. Loaiza trabajaba como entrenador físico para San Antonio Athenians, un equipo femenino de fútbol. Fuera de temporada, trabajaba en cuadrillas de construcción cortando azulejos y piedras, y también como mesero. En noviembre, habiendo encontrado mejores oportunidades de trabajo en Nueva York, el Sr. Loaiza regresó allí de manera temporaria y enviaba dinero a su familia, que había permanecido en Texas

En marzo, cuando la ciudad de Nueva York se transformó en epicentro del brote de coronavirus, el Sr. Loaiza regresó a San Antonio e hizo la cuarentena en su casa. Pero, el virus no estaba lejos de él y cuando llegó con toda su fuerza a Texas, los trabajos desaparecieron. El Sr. Loaiza y su mujer tenían suficiente dinero ahorrado para cubrir el alquiler de abril, $1,595, pero tuvieron que economizar en otros gastos. Comenzaron a depender de las cajas de comida de su iglesia. Como dije antes, el alquiler come primero.

Presintiendo que su familia no podría pagar otro mes más de alquiler, el Sr. Loaiza solicitó asistencia de emergencia y llamó al servicio de ayuda vecinal y de viviendas de la ciudad con tanta frecuencia que los operadores llegaron a conocerlo por su nombre. Pero, parecía que todo San Antonio estaba llamando y el Sr. Loaiza se enteró que podría pasar un mes entero antes de que llegara ayuda, si es que llegaba. Cuando Houston aprobó $15 millones como ayuda adicional para alquileres, se agotó en menos de dos horas.

Llegó el mes de mayo y la familia se atrasó en el pago. El propietario de la vivienda, Ricardo Acosta, entregó el aviso de desalojo el 2 de junio a la hija de 12 años que atendió cuando llamaron a la puerta. El aviso de desalojo decía que: “El arrendador exige que el arrendatario desaloje la propiedad antes de la fecha indicada en el párrafo B”, que era el 6 de junio. El Sr. Loaiza jamás había pasado por una situación similar. Estaba confundido y se sintió intimidado por un lenguaje cuyo efecto era justamente ése. ¿Realmente tenía tan sólo cuatro días? El Sr. Loaiza lloró cuando leyó el aviso.

Es entendible que muchos inquilinos dejen sus casas cuando esto sucede, pero el Sr. Loaiza llamó al centro de justicia legal y social de la facultad de derecho de la Universidad Sr. Mary y se enteró que su aviso de desalojo era solamente el primer paso del proceso. Un abogado le explicó que si no dejaba la casa el 6 de junio, seguramente le llegaría una notificación oficial de desalojo.

Sin embargo, una semana después, el Sr. Loaiza se enteró que había sido aprobado para recibir $3,000 como ayuda de emergencia, 44 días después de presentar su solicitud, y los pagos serían enviados directamente al arrendador. Pero, el arrendador no canceló el proceso de desalojo; la ayuda todavía no había llegado. Dos días después, el tribunal emitió la notificación de desalojo. En la primera frase se leía que “Usted ha sido demandado”. Se fijó el 10 de julio como fecha para comparecer ante el juez. El Sr. Loaiza no creía posible que pudiera ganar $3,190 — el alquiler de mayo y junio — para esa fecha. Rezó para que su arrendador recibiera a tiempo el dinero de la ayuda.

Muchos desalojos durante la pandemia fueron por mucho menos. Según datos que acaban de ser presentados por el laboratorio sobre desalojos de la universidad de Princeton, el cual dirijo, el mes pasado una familia promedio se enfrentaba con ser desalojada por $1,172 en el condado Hamilton, Ohio (zona suburbana de Cincinnati ) y por $1,706 en el condado Maricopa, Arizona (zona metropolitana de Phoenix). Pero, aproximadamente uno de cada 24 desalojos presentados en el condado Hamilton y seis en el condado Maricopa, fueron por $500 o menos. En una semana promedio del mes de julio, el condado Maricopa procesó aproximadamente 43 casos de desalojo que involucraban a familias que adeudaban menos de $100.

Primero pasó una semana, después otra, y el Sr. Loaiza todavía no sabia si había llegado la ayuda. El 23 de junio, el arrendador le envió un mensaje de texto “Jhon, dijiste que ibas a desocupar la casa el fin de semana pasado. ¿Está desocupada la casa ahora?”.

El Sr. Loaiza se sintió agotado y sin fuerzas; “impotente” fue lo que me dijo. Comenzó a no poder dormir, y el estrés se metió en su cuerpo como un veneno. El Sr. Loaiza pensó seriamente en matarse. Dijo que jamás había tenido ese pensamiento destructivo antes, pero la mera desesperación ante la situación era sofocante. Los agentes que se encargan de hacer cumplir los desalojos tienen muchísimas historias para contar al respecto: la llamada a la puerta a primera hora de la mañana seguida por un único sonido de disparo de revolver en el interior del departamento, el seco sonido de darse por vencido. Desde 2005 hasta 2010, años en los que el precio de los alquileres se disparó por todo el país, se duplicaron los suicidios atribuidos a desalojos y ejecuciones judiciales.

El Sr. Loaiza se esforzó para superar todo, la necesidad de dormir, de enterrarse y, con la asistencia para alquileres aparentemente estancada, comenzó a llamar a amistades de San Antonio preguntando si podían recibir a su familia. Nadie tenía lugar. Finalmente, unos amigos de Florida le ofrecieron dos habitaciones y espacio para guardar cosas en el garaje de su casa. El Sr. Loaiza y su mujer comenzaron a empacar y a limpiar el departamento, con la esperanza de recuperar el depósito de garantía que habían pagado. Para poder pagar el U-Haul, el Sr. Loaiza aceptó el primer trabajo que encontró y se unió a una cuadrilla de construcción que estaba trabajando en un gran edificio.

“Jhon, ¿está desocupada la casa ahora?”, volvió a escribir por texto el Sr. Acosta el 1 de julio. Lo estaba. Al amanecer, la familia había comenzado su viaje al este. El Sr.Loaiza manejaba el U-Haul, mientras su mujer y las niñas lo seguían en el carro de la familia. Pocas horas después, el Sr. Loaiza comenzó a sentirse enfermo, afiebrado. Se puso tan mal que su mujer lo mantenía conectado al teléfono para estar segura que estaba lúcido.

Una asistente legal y abogada de St. Mary’s se ofreció como voluntaria para representar al Sr. Loaiza y a su mujer en su ausencia. El día previo a la audiencia por desalojo, la abogada llamó al departamento de servicios vecinales y de vivienda para preguntar sobre el demorado pago de ayuda para alquileres de la familia. Se enteró que el cheque por $3,000 había sido efectivamente emitido para el arrendador y que él lo había cobrado varias semanas atrás, el 19 de junio, días antes del mensaje de texto que había enviado a Jhon para que desocupara la casa. (A pesar de múltiples pedidos, el Sr. Acosta no aceptó ser entrevistado, pero sí me dijo que “el inquilino había desocupado la casa para encontrar trabajo en otra parte. Los registros judiciales mostrarán eso”. El Sr. Loaiza me dijo que se mudó porque se sintió obligado a salir de su hogar y que jamás le había dicho al Sr. Acosta que se estaba yendo en búsqueda de oportunidades laborales.

Todo este dolor — el estrés tan paralizante que comienza a aparecer el suicidio como remedio, cortar lazos con la iglesia y la escuela, amistades, desarraigar a la familia de la comunidad y el trabajo — no fue por $3,190. Si fue por algo, fue por $190. La abogada intentó llamar al Sr. Loaiza varias veces sin lograrlo. Cuando lo hizo, él ya estaba en Florida, en una cama de hospital con Covid-19.

El alquiler es la más ávida de las cuentas. Para muchas familias, crece todos los años, arbitrariamente, casi mágicamente, y no se debe a mejoras hechas a la casa; solamente porque sí. “Hay demanda”, dicen cuando te entregan un contrato nuevo con un fuerte aumento. O, “los gastos están subiendo”. Lo que en realidad te quieren decir es: “Porque puedo hacerlo”. Y, a diferencia de otras cuentas, dejar de pagar el alquiler puede tener consecuencias inmediatas y devastadoras, haciendo caer a las familias en la pobreza y en la falta de techo. Si no tienes suficiente para la comida, generalmente calificas para recibir sellos para comprar alimentos. Si no pagas la hipoteca un mes, generalmente pasan 120 días antes que el banco inicie el proceso de ejecución. Pero, si no pagas el alquiler, puedes perder tu hogar en cuestión de semanas. Durante la primera mitad de julio, los arrendadores cobraron 37 por ciento del total de alquileres a familias que viven en propiedades clase C — típicamente unidades viejas que albergan trabajadores con ingresos bajos o moderados, comparado con 80 por ciento durante los primeros tres meses del año.

La cobertura mediática de la crisis de vivienda típicamente se enfoca en grandes ciudades costeras, donde el alquiler de un departamento de un dormitorio puede superar los $3,000. Pero, este problema no es exclusivo de Nueva York o San Francisco. Entre los lugares con mayores porcentajes de desalojos se encuentran Tulsa, Oklahoma; Albuquerque; Indianápolis; Toledo, Ohio; y Baton Rouge, Luisiana, por no mencionar muchas comunidades suburbanas y pequeñas ciudades de todo el país.

Antes de la pandemia de Covid-19, todos los meses más de 800,000 personas de todo el país estaban amenazadas con ser desalojadas. Hoy en día, con tasas de desempleo no vistas desde la gran depresión y con el vencimiento de beneficios federales además de las moratorias nacionales de desalojo de varios estados, millones de inquilinos están en peligro de perder sus hogares para fin de año. Este proceso ya está encaminado. En Tucson, generalmente se ven de 10 a 30 desalojos por día. En junio se atendieron casi 50 casos por día. Ese mismo mes, los casos de desalojo subieron un 70 por ciento en Alabama, en comparación con el pasado mes de junio. En la última semana de julio, los pedidos de desalojo subieron 109 por ciento por encima del promedio normal en [Milwaukee](https://evictionlab.org/eviction-tracking/milwaukee-wi/).

Durante una pandemia que vincula con fuerza nuestra salud a nuestros hogares, los desalojos harán extender el virus ya que las familias desalojadas se amontonarán en refugios, en casas de familiares y de amigos o pondrán su salud a riesgo haciendo trabajos poco seguros para poder pagar el alquiler o los gastos de mudanza.

También hablé con Margie Hernández, una viuda de 63 años de San Antonio que había mudado su familia a un Best Western después de haber sido desalojados en junio. La familia Hernández había cumplido con las pautas de salud antes de ser desalojados ‘’ quedándose en casa todo lo posible, haciendo distanciamiento social — pero en el vestíbulo del hotel estaban “empacados como sardinas”, me dijo la Sra. Hernández. Ella y sus hijos usan mascarillas, pero muchos huéspedes del hotel no lo hacen. Unos días después de registrarse en el hotel, la Sra. Hernández y uno de sus hijos adultos sintieron que habían perdido el gusto. Era Covid-19. La Sra. Hernández pasó cinco días en cuidados intensivos y todavía está con oxígeno. Su hijo de 27 años sigue en el hospital con diálisis.

El Sr. Loaiza se recuperó del Covid-19 y consiguió trabajo pintando casas en Florida; su familia recientemente se mudó a un lugar propio. Pero, él todavía no se ha recuperado totalmente de su juicio de desalojo. “Estoy irritable y tengo problemas para concentrarme”, me dijo. “No duermo bien”. El Sr. Loaiza cree que contrajo el virus durante el trabajo en construcción que tomó para poder pagar el U-Haul. Por ser fanático de la salud, trató de mantener el distanciamiento social pero le resultó imposible. Si la ayuda de emergencia hubiera llegado antes o si su arrendador hubiera cooperado con su familia, el Sr. Loaiza no hubiera tenido que ponerse en esa situación de riesgo. “Si hubiera tenido la oportunidad de trabajar desde casa y evitar el virus, lo hubiera hecho”, me dijo. “Pero, tuve que ir”. Es probable que el Sr. Loaiza, al igual que la Sra. Hernández y su hijo, hayan contraído Covid-19 por lo que les sucedió después de sus casos de desalojo.

Los profesionales de la salud han alertado sobre la manera en que la crisis de desalojos exacerbará nuestra emergencia sanitaria. A principios de agosto, 26 asociaciones médicas firmaron una carta urgiendo al congreso que ofreciera recursos habitacionales para familias de inquilinos, reconociendo que la crisis de vivienda es una crisis sanitaria.

Nuestros esfuerzos por derrotar el Covid-19 y recuperarnos del daño económico que ha forjado se verá profundamente comprometido si no ayudamos a las familias a retener sus hogares. Además de hacer subir las tasas de infección por coronavirus, la crisis de desalojos también agravará nuestra crisis de desempleo, ya que los trabajadores se verán desplazados lejos de sus tareas y complicará aún más la complicada reapertura de escuelas, ya que los niños desalojados, que ya tienen mayor riesgo de infección, irán pasando de una escuela a otra.

Los desalojos no resuelven nada. Los propietarios de viviendas de alquiler no necesitan recurrir a la amenaza de desalojo para que se les pague. Si lo hicieran, deberíamos ver mayores niveles de cobranza en estados donde han vencido las moratorias de desalojos y menores niveles de cobranza donde se prohíbe a los propietarios desalojar a las familias. Pero, no es eso lo que muestra la información de la industria. No existe una diferencia apreciable entre cobranzas de alquileres en estados donde todavía hay moratorias de desalojos y en aquellos donde ya han vencido. La diferencia estriba en la ayuda para alquileres. Aquí es donde se supone que debo ofrecer soluciones, cuanto más originales mejor, y quizás también debería compartir un ejemplo de ciudad donde se están haciendo bien las cosas. Pero, lo cierto es que solamente hay una entidad que puede evitar que incalculables familias de inquilinos de todo el país sufran durante las próximas semanas y meses lo que han sufrido las familias del Sr. Loaiza y la Sra. Hernández — y es el Congreso. Entiendo que pedir una rápida acción al gobierno federal puede sonar como lavarse las manos, pero en este momento cualquier otra cosa menos que eso es tristemente inadecuado.

El Congreso tiene que hacer su trabajo de proteger la seguridad y la salud de las familias estadounidenses. Necesitamos que en todo el país se detengan los desalojos y que se ayude enérgicamente a los inquilinos. Los expertos estiman que se necesitarán entre $7 y $12 billones mensuales de ayudar para que los trabajadores que alquilan estén seguros y protegidos en sus hogares. Pero, en vez de dictar una ley de asistencia basada en la legislación que la cámara baja pasó hace dos meses, Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado, vaciló antes de que el Senado entrara en receso hasta el Día del Trabajo, permitiendo que el país avance a toda marcha hacia una crisis de desalojos. Esta actitud de esperemos a ver que pasa no es solamente cruel, se ocupa de pequeñeces y deja de lado las cosas importantes. Será mucho más costoso, tanto en vidas como en dinero, responder reactivamente a la inminente crisis de desalojos que actuar ahora y evitar que el problema se torne mucho peor. Demasiados estadounidenses ya han perdido sus vidas y sus trabajos. No habrá ninguna excusa para que también pierdan sus hogares sin necesidad.

El patrón es bien conocido: el Congreso es negligente en lo que se refiere a proteger las necesidades habitacionales básicas de las familias. En los últimos años, mientras muchos trabajadores vieron como sus ingresos se estancaban o caían mientras sus alquileres y costos por servicios subían, el Congreso se negó a aumentar la inversión en viviendas accesibles. Actualmente, la mayoría de las familias de inquilinos que califican para recibir ayuda para vivienda, no la reciben — sencillamente no hay dinero que alcance — y la mayoría de quienes están por debajo de la línea de pobreza gastan en vivienda más de la mitad de sus ingresos Esto debe cambiar. Cualquier plan comprensivo que promueva la movilidad social, se ocupe de disparidades raciales y estabilice comunidades debe estar basado en nuestra necesidad fundamental de viviendas seguras y accesibles.

.